

Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 6 de 1873.—Como pide el señor fiscal, remítase la circular, insertándose este pedimento, publicándose en el Diario Oficial y Semanario Judicial la circular que se expida.”

Y en cumplimiento de lo mandado, lo comunico á usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, Noviembre 10 de 1873. Por ocupacion del señor secretario, *Alejo Gomez Eguarte.*

INCIDENTE.

En la causa seguida en averiguacion del extravío de un libro, de la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El fiscal dice: que el Juez 2º de Distrito de México Lic. José María Canalizo, se ha presentado á esa 1ª Sala pidiéndole revocacion por contrario imperio del acuerdo dictado por la misma, en 11 de Mayo proximo pasado, con motivo de la apelacion que dicho funcionario interpuso del acordado que decretó en su contra la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, fungiendo como de Circuito, en la averiguacion que el Lic. Canalizo sigue sobre extravío de un libro de la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda.

El acuerdo de esa Sala cuya revocacion se pretende, previno con arreglo á derecho: que se reservára este incidente para cuando se recibiera la causa principal. El C. Canalizo alega: que estando esa causa en suspenso y el reo prófugo, el término de la causa se aplaza por un tiempo indefinido, y entre tanto el acordado del inferior producirá sus efectos con arreglo al artículo 14 del decreto de 24 de Marzo de 1873. El fiscal ha querido fijar esa razon, porque como es

la que se aduce como fundamento principal y decisivo, para que esa Sala tome una providencia tan grave como es la de revocar por contrario imperio un acuerdo muy conforme con lo determinado por las leyes, y sentar un precedente para casos semejantes que puedan ocurrir, se hace necesario examinar, hasta que punto ese fundamento ó razon que alega el C. Juez 2º de Distrito, es exacto ó equivocado.

Como se ha dicho, se parte para pedir la revocacion referida, del principio de que mientras la Sala no falle sobre este incidente, el acordado del Tribunal Superior, causará su efecto; este principio en opinion del suscrito, no es enteramente exacto; por el contrario, el fiscal cree que mientras esa Sala no pronuncie su resolucian definitiva, no habrá ejecutoria; y no habiéndola, el acuerdo del Tribunal estará en suspenso por un tiempo mas ó menos largo; y si nunca se llegare ese tiempo, nunca surtirá sus efectos respecto del reclamante, y por lo mismo, en cuanto á esos efectos es como si no existiera ese acuerdo. Este raciocinio lo funda el fiscal en la parte final del dicho artículo 14 del decreto citado, en que se manda suspender la reprision ó correccion que se imponga á los Jueces, cuando representen sobre ello; la funda tambien en el argumento formado con presencia de las fracciones 6ª, 7ª y 8ª del artículo 179 de la ley de 4 de Mayo de 1857, todas las que bien dan á entender, que las correcciones ó advertencias que se imponen á un Juez al revisar las causas que forman estos, quedan sujetas á la determinacion que en definitiva dé la Sala revisora. Solo impropriadamente hablando se puede llamar súplica, al recurso que la ley dá al Juez; corregido ó advertido para acudir al útimo superior, en solidad de la revocacion ó reforma de un acordado; porque súplica jurídicamente hablando, se dice solo de la tercera instancia y no debe olvidarse, que el Juez que representa sobre un acordado, ha de hacerlo *sin causar instancia*, fraccion 6ª citada; y sería un no-

table absurdo sostener, que puede haber segunda ó tercera instancia donde no existe primera. Las demostraciones ó advertencias que se hacen á los Jueces en segunda ó tercera instancia, al visar ó revisar las causas que forman, no tienen mas carácter que el de penas correccionales (fracción 5ª del artículo y ley que se han citado); y por lo mismo se imponen de plano y sin figura de juicio; mas en atencion á la dignidad de la magistratura, se permite al Juez penado, que represente al superior respectivo, el cual tambien al ratificar, modificar ó levantar la correccion ó advertencia impuesta, procede igualmente sin forma de juicio; reservándose esto, para el caso en que la gravedad de la culpa exija formal proceso (fracción 5ª antes citada).

En resumen, el fiscal cree: que por decoro á la misma Sala, por la legalidad que en sí encierra el acuerdo de 11 de Marzo contra el que se representa, para no establecer un precedente cuyos resultados no es muy fácil prever; pero si que acaso puede influir en el retardo de la pronta administracion de justicia, tomando en cuenta las consideraciones que el legislador tuvo presentes para determinar repetidas veces que esta clase de incidentes se fallen cuando se vea el negocio en lo principal y con tanta especialidad, que previéndose el caso de que la causa ó sentencia no admitiera revision, entonces se tome en consideracion por quien corresponde, el punto solo relativo al extrañamiento ó demostracion; pero siempre cuando el negocio esté en definitiva ó haya concluido; en atencion por último, al poco ó ningun provecho que resultarán al C. Juez 2º de Distrito, de una providencia tan grave como es la de que esa misma Sala, revoque un acuerdo conforme á las leyes; el suscrito concluye pidiendo á la Sala se sirva declarar: que no procede la revocacion por contrario imperio que se pretende, contra el acuerdo que dictó en 11 de Marzo último, sino que por el contrario, es de ha-

México, Abril 14 de 1873.—*Altamirano.*

Sentencia en artículo.

México, Junio 10 de 1873.—Vistos en artículo los autos seguidos sobre averiguacion del extravío de un libro de la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, á fin de resolver si es de revocarse el auto que pronunció esta 1ª Sala en 11 de Mayo último que declaró: que se reserve determinar para cuando se reciba el negocio principal, el incidente sobre la apelacion interpuesta por el C. Juez 2º de Distrito de esta Capital Lic. José María Canalizo, del acordado que le impuso en dichos autos la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito en su calidad de Circuito, y cuyo acordado previene: Dígase al Juez 2º de Distrito de esta Capital, que cuide de ajustar sus procedimientos á las leyes, para no incurrir en las infracciones que se han notado en el auto de 11 de Agosto de 1871, adhiriéndole, que esa demostracion se le hace para que surta los efectos del artículo 14, capítulo 1º de la ley de 24 de Marzo de 1873. Visto lo pedido respecto al punto indicado por el C. fiscal; el informe del apelante, con todo lo demas que se tuvo presente y ver convinco; de conformidad con el pedimento del fiscal, el informe del apelante, y por los fundamentos que constan en su dictámen, especialmente por la razon de que dicho acordado no causa efecto alguno, sino hasta que esta Suprema Corte falle respecto de él, se declara: que no es de revocarse el auto que pronunció esta 1ª Sala, en 11 de Marzo último, y por lo mismo estese á lo mandado.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y, firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro*

n.—*Ignacio Ramírez.*—*M. Arzu.*—

varse adelante

| *Ogaz*

S. Guzman.—*Luis M. Aguilar*, secretario.
Es copia. México, Junio 30 de 1873.—
Alejo Gomez Eguarte, oficial.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. T. Heymann y C^{as}, contra la providencia del C. Administrador de la Aduana marítima, que en uso de la facultad económico-coactiva los obliga al pago de la cantidad de ocho mil doscientos veintinueve pesos sesenta y ocho centavos, como tercera parte de los derechos de importación que causaron las mercancías descargadas en este puerto, del bergantín "Amanda."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Los señores T. Heymann y compañía solicitan de vd. amparo contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana marítima, que obrando en virtud de las Órdenes del supremo gobierno trata de exigir de dichos señores el pago de \$ 8,229, 68 cts. ocho mil doscientos veintinueve pesos, sesenta y ocho centavos que es la 3^a parte de los derechos que causaron las mercancías importadas por el bergantín "Amanda;" y que según la manifestación que los mismos señores hicieron al C. general S. Rocha, pagaron á los pronunciados que ocupaban esta plaza. La queja de amparo se funda, C. Juez, en asentar que el C. Administrador de la Aduana marítima no es autoridad competente para proceder contra dicha casa, supuesta su resistencia en pagar de plano la tercera parte de derechos á que por equidad el supremo gobierno tuvo á bien reducir la responsabilidad íntegra que les resultaba, por haber indebidamente pagado á autoridades que no eran las legi-

timas; y esto cuando estando previamente clausurado el puerto, en virtud de disposiciones legislativas anteriores y después del precedente de Tampico, nadie ignoraba que se haría efectivo el doble pago de derechos, siempre que estos se pagaran á la revolución. Es cierto, que de parte de los señores T. Heymann militan diversas razones, que sin duda fueron atendibles; pues el mismo general Rocha que estuvo inexorable respecto de otras casas importadoras, tuvo á bien eximir á aquellos señores de dar pagarés, y solo quedó su responsabilidad pendiente de la suprema resolución del gobierno. Es cierto, también, que no firmaron fianza alguna, según informe del Administrador de la Aduana marítima; pero también lo es; que el gobierno al resolver sobre los pagos hechos en Mazatlan y obrando como debía obrar por medio de una medida general, y sin duda la mas equitativa, resolvió que todos sin escepcion debieran pagar solo la tercera parte. Pues bien, aquí entra perfectamente la facultad coactiva de parte del Administrador de la Aduana marítima, que tenía que hacer efectivo un pago decretado en virtud de disposiciones legislativas anteriores al hecho y que el gobierno en virtud de ellas, solo se había por equidad hecho mas benigno; debía pues proceder á requerir de pago, y en caso contrario á asegurar bienes equivalentes á cubrir los adeudos fiscales.

Que los procedimientos de dicho C. Administrador no son conformes con las leyes que reglamentan la facultad coactiva, será cierto y podrá producirse como prueba en un juicio contencioso y declarativo; pero que el Administrador tiene la facultad y el deber de proceder por los trámites expeditivos y sumarios al aseguramiento de los intereses fiscales y solo con el fin de que estos no se hagan ilusorios dejando á la hacienda pública pelear despojada, es lo que creo que es insostenible y de ninguna manera importa la violación de el art. 16 de la Constitución general de la República.